

1813.—*Lic. Andrés Quintana*, vicepresidente.—*Lic. Ignacio Rayón*.—*Lic. José Manuel de Herrera*.—*Lic. Carlos María Bustamante*.—*Dr. José Sixto Verduzco*.—*José María Liceaga*.—*Lic. Cornelio Ortiz de Zárate*, secretario.

NÚMERO 132.

Decreto de 19 de Febrero de 1814. — Se declara que los empleados de la hacienda militar son subalternos del ministerio de la guerra.

Las Cortes, despues de tomar en la debida consideracion la memoria que el secretario del despacho de guerra leyó en la sesion del dia 3 de octubre último, han decretado lo siguiente: 1º El número de comisarios de guerra y ordenadores, será únicamente el preciso y correspondiente á la fuerza de que haya de constar el ejército nacional. 2º Como esta fuerza no se haya aun fijado por las Cortes, y su plan pende de la constitucion militar, no se proveerá empleo alguno de comisario hasta sentar aquellas bases, mediante á que el excesivo número que en la actualidad hay de ellos, no deja recelar que entre tanto falten los necesarios. 3º Cuando llegue el caso de proveerlos, su nombramiento se hará exclusivamente por la secretaría de guerra, de la que únicamente serán subalternos todos los empleados de la hacienda militar del ejército. 4º Se señalará un breve y perentorio plazo á juicio del gobierno, si no lo estuviere ya, para la purificacion de los comisarios ordenadores y de guerra que permanecieron en pais ocupado por el enemigo, así como para la revalidacion de los que obtuvieron sus títulos de las juntas ó otras autoridades; y pasado dicho plazo no serán reconocidos ni admitidos bajo el carácter de tales comisarios por ningun motivo. 5º Se observará rigurosamente en estos destinos la escala que debe preceder para llegar á ellos. 6º El número de auditores de guerra en los ejércitos y provincias, deberá

también fijarse en proporcion determinada al número y necesidad de sus destinos en la fuerza armada nacional, sin que puedan ser distraidos á otras comisiones que á las peculiares de su instituto en la administracion de justicia, á la manera que está mandado respecto á los magistrados de las audiencias. 7º Para ningun destino de los estados mayores de plazas, será propuesto ni provisto oficial alguno que no haya servido en el ejército activo, y careciese ya de suficiente aptitud para seguir en él. 8º Se recomienda al gobierno el que procure por todos los medios posibles que el surtimiento de vestuarios y monturas se provea dentro de la Península ó sus islas. 9º El sueldo y gratificacion del soldado se pagará íntegramente en dinero, aboliendo el método perjudicial de raciones fuera de los casos y términos que previene la ordenanza. 10. El ramo de bagages se arreglará de suerte que sea una carga general en lo absolutamente indispensable, pagada por provincias ó partidos del fondo de las contribuciones comunes. 11. El número de colegios militares y el de sus alumnos, se reducirá en razon de los oficiales que correspondan y sean necesarios para las tropas de continuo servicio, situándolos en los parages de la Península ó islas que se gradúen mas á propósito por el clima, salubridad, abundancia de mantenimientos, y distancia ó localidad respectiva, cuidándose con particular empeño de su asistencia y métodos uniformes de enseñanza; determinándose y dotándose asimismo en cada colegio el número de plazas para los alumnos que por distinguidos servicios de sus padres hubieren de costearse á expensas del estado. 12. La edad para la admision y permanencia en estos colegios, se señalará de modo que los alumnos, cuando tengan la correspondiente para los alistamientos del ejército, hayan dado ya pruebas de su idoneidad ó ineptitud; continuando en el primer caso en los colegios, y siendo excluidos en el segundo para comprenderse en los reemplazos.